

LA REPUBLICA PERUANA EN EL SIGLO XX

Segunda Conferencia dictada en la Facultad de Medicina de San Fernando
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
a los ingresantes del año 1999

Mario Meza Bazán
Historiador de la UNMSM

El período que va entre 1930 y el 2000 es de los que históricamente se presenta como la más compleja en la historia peruana. No solo por la cercanía que implica a los narradores y analistas con relación a los actores y acontecimientos ocurridos los cuáles tienen sus preferencias, sus prejuicios y su visión de la realidad (que en el fondo no los diferenciaría de los historiadores de otros periodos) sino por que históricamente es un periodo de mediana duración que observado del modo mas objetivo posible por los investigadores sociales contemporáneos - y pese a las diferencias de posiciones que puedan existir sobre este periodo- están de acuerdo en que los cambios y transformaciones se han acelerado de tal manera en la sociedad peruana con respecto a periodos anteriores (excepto quizás por el proceso de la conquista), que es imposible hablar de una sola continuidad entre 1930 y el 2000. El Perú en ese sentido se inserta como el resto del mundo a la aceleración del tiempo histórico y al acortamiento de las distancias físicas - ambas cualidades elementales de la globalización - sin que de por medio en este país haya cambiado al parecer el sentido de muchas cosas, sobretudo en las esferas del poder, o que en el mejor de los casos se haya vuelto mas sofisticado en la preservación de hábitos y privilegios. Una vez más la modernidad y sus intentos por establecer sus principios normativos en un país de milenaria tradición andina y secular contacto con el mundo occidental se convierte en el drama de esta historia.

EL PENDULO DEL PODER: ENTRE CONSERVADORES Y REFORMISTAS

Sin duda la primera República Populista y reformista fue la de Augusto B. Leguía entre 1919 y 1930. El "Oncenio" o "Patria Nueva" es más celebre por que forma parte de un nuevo precedente político y social de ejercicio del poder desde el Estado. Los mecanismos institucionales típicos de un ordenamiento jurídico republicano combinado con un arbitrario y autoritario personalismo dictatorial, complementado con políticas económicas sustentados en el gasto fiscal para conseguir un apoyo clientelar (favores y conrafavores electorales y políticos) de las masas y sus representantes que iban más allá de las posibilidades inmediatas de la economía peruana y que de hecho implicaba endeudamiento externo, fueron sus principales cualidades y ellas se han mantenido con variantes desde aquella época. Por otro lado el gobierno de Leguía representa también la nueva conformación de una institucionalidad emergente desde las exigencias de las clases medias emergentes y populares pero con los esquemas típicos de dominación y gobierno de las clases aristócratas, oligárquicas y tradicionales que conceptualizaban aún que el ejercicio excluyente del poder era una necesidad por que de otro modo destruirían el orden tradicional de la sociedad.

La crisis de 1930 sin embargo marcó a la sociedad peruana en un momento de crisis mundial originada en 1929 en Estados Unidos. Esto significó la caída del dictador y la liberación de las fuerzas políticas y sociales desarrolladas en su gobierno pero que fueron contenidas por el favor político o la pura represión, lo que a la postre significaría un realiniamiento político de clases y grupos sustentadas en sólidas y estructuradas ideologías -una cualidad que los diferencia de las décadas anteriores- dispuestas a enfrentarse por el acceso y control del gobierno.

Entre 1930 y 1933 podemos observar hasta tres tendencias en la arena de la confrontación política, de las cuáles dos serían absolutamente antagónicas en este periodo pero que en las siguientes décadas estaría signada por flirteos y concordatos. La primera Fuerza representaba el reagrupamiento de los partidos políticos tradicionales de la oligarquía en la escena nacional. Aquellos que fueron desplazados por Leguía y su grupo del poder y que representaban los intereses más conservadores de los terratenientes, comerciantes y de las empresas transnacionales que impulsaban el mantenimiento principalmente de una política económica orientada al libre mercado y del esquema exportador de materias primas como principal fuente de sustento y reproducción del país. La segunda fuerza política y social estaba conformadas por las tendencias izquierdistas salidas de los sectores organizados de los trabajadores, las clases medias, principalmente estudiantes radicalizados y transfugas de las clientelas del leguismo, representados principalmente por el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el reconvertido PC (Partido Comunista) del antiguo Partido Socialista fundado por J. C. Mariátegui y que prontamente fue sacado de la escena por las leyes de emergencia expedido por el represivo gobierno del coronel Luis Sánchez Cerro. Ellos exigían la transformación de un Estado, hasta entonces excluyente y que había servido a los intereses imperialistas, en uno democrático en el caso del Apra y proletario en el caso del PS, con una economía dirigida hacia el desarrollo y a la plena satisfacción de las necesidades internas del país. Y una tercera posición que agrupaba a los sectores ligados anteriormente al gobierno leguista por acuerdos políticos clientelares, radicados principalmente en las provincias del interior del país entre sus elites y clases medias pertenecientes tanto a las ciudades como a la propia capital. Ellos conformarían la posición centrista reivindicacionista antes que nada del descentralismo económico y político y el derecho de las regiones a ser consideradas como partes fundamentales del país ante el absorbente poder de la capital limeña.

La confrontación de estas fuerzas aglutinantes de la población sin embargo se daría entre derecha conservadora y la izquierda revolucionaria, siendo la posición centrista regional con los años absorbida por cualquiera de las dos tendencias al menos hasta la década de los '50 en que surgiría una nueva posición reformista aunque de base más social estructural que regional. Mientras tanto la confrontación de ambos sectores en las elecciones de 1932 terminó trágicamente para el país cuando Luis Sánchez Cerro, apoyado ahora por la oligarquía conservadora, y Haya de la Torre, apoyado por las capas medias y populares, se confrontaron en las urnas saliendo oficialmente elegido el primero y el segundo denunciara como fraudulentos aquellos comicios. La guerra política en ese sentido estaba declarada y la insurrección aprista de Trujillo, aplastada fuertemente en ese año por el ejército, y el asesinato de Sánchez Cerro en 1933; puso al país muy cerca a una guerra civil. La difícil situación que se vivía impulsó entonces a los sectores civiles de la sociedad hacia 1933 a aprobar una nueva Carta Constitucional que regiría hasta 1979 y a encargar el gobierno a un militar experto en resolver situaciones difíciles de confrontación y desorden interno como el general Oscar R. Benavides y que gobernó sin permitir oposición interna alguna entre 1933 y 1939. Esta fase marca también un momento crucial en la vida política del país al empezar la Fuerza Armada como una institución castrense organizada y solidamente estructurada en sus mandos a participar de modo más activo en la vida de la nación.

Con la oposición interna dominada y la recuperación económica luego del caótico periodo previo, pudo entregar Benavides el poder a Manuel Prado Ugarteche, perteneciente a la clase empresarial y financiera del país, quién pudo con el apoyo del saliente gobierno consolidar su poder, más aún cuando el ejército pudo levantar su prestigio al lograr una resonante victoria contra Ecuador en 1941. En este periodo el APRA y el PC aún en la clandestinidad no

podieron representar sus roles de oposición no solo por que no estaban legalizados sino por que apoyaron el mantenimiento de un sistema democrático formal detentado por un empresario como Prado entre 1939 y 1945, lo que les podía dar algunas ventajas. Para el APRA el presidente elegido podía ser la parte menos retardataria de una burguesía nacional incipiente que impulsaba la modernización del país si no al menos como ellos lo proponían la tímida política de industrialización garantizaba un crecimiento entre las clases populares; y por otro lado, la transición democrática de este gobierno les permitiría reingresar a la legalidad luego del periodo de represión vivido. Ambas eran posibilidades que no podían perderse. En el caso del PC existían los mismos motivos pero además creían que como el presidente elegido apoyaba a los países occidentales en la guerra contra los fascistas, indirectamente apoyaban a la Unión Soviética que por ese tiempo propugnaba a los PCs del mundo la construcción del socialismo en un solo país y la reforma gradual de sus sociedades con el consiguiente apoyo a sus burguesías nacionales. El PC peruano como fiel seguidor de Stalin no podían darse el lujo de desobedecerlo. Para el regimen democrático de Prado reinsertar a los partidos de izquierda en el escenario nacional (APRA y el PCP) ayudaría a moderar entonces las posiciones y las exigencias de sus bases sociales entre los trabajadores y clases medias que para esta época iban creciendo al ritmo de la industrialización del país.

En resumen la década de 1930 marcó la primera etapa de crisis del sistema oligárquico de poder que sostenían las elites aristocráticas porque aún cuando se retornó en la década del '40 a la democracia formal, ésta había dejado entredicho que su poder político se sustentaba en la exclusión de los derechos de la población que hacia esta época crecía en las ciudades al ritmo de un sector industrial. El poder oligárquico estaba seriamente cuestionado y su deseo de volver el reloj de la historia hacia el periodo anterior a Leguía era solo un recuerdo, lo que demostraba su incapacidad para canalizar por una vía institucional de representación partidaria y competencia electoral la legitimidad política de sus intereses. Su continua obstinación de democratizar al país recurriendo al ejército para la protección de sus intereses con sucesivos golpes de estado demostraba esa incapacidad. Pero también demostró que el sector empresarial e industrial nacional del país (Burguesía) le preocupase muy poco reformar y democratizar el poder simultanea al tibio proceso de industrialización interna. Por otro lado, el papel de las Fuerzas Armadas también es clave en la comprensión de éste y los periodos que vendrían luego ya que era un sector que se iba institucionalizando desde principios de siglo. Su posterior evaluación de la incapacidad del sector oligárquico civil para democratizar al país y realizar las reformas que necesitaba, iría persuadiéndoles con el tiempo que la protección de los intereses oligárquicos reprimiendo a los partidos opositores y representativos de las masas debilitaba lo que conceptualizaban era su tarea primordial: la defensa nacional. A la larga esto sería un motivo de alejamiento de los militares del sector oligárquico.

Incorporados el APRA y el PC en la vida político legal del país y habiendo moderado las exigencias populares al punto que el APRA apoyó la candidatura de Luis Bustamante y Rivero en las elecciones de 1945, permitiéndole alejar las suspicacias de quién se había nombrado su enemigo político (el ejército), y del PC que tenía una gran influencia en los sindicatos de trabajadores y con apoyo del propio Prado que quería aliviar la influencia aprista entre las masas, es que se produce la victoria de Bustamante con el apoyo del APRA al parlamento.

Esta alianza sin embargo no perduró. El afán del APRA de regresar a la escena política sin mayor confrontación con las clases oligárquicas y la moderación política que lo llevaron a pactar esa entrada, no tuvo plena aceptación de parte de la población que en aquella década seguía creciendo dado los impulsos industrializadores en las ciudades y las masivas migraciones de la población rural a ella como mano de obra. La presión de las demandas populares por mejores condiciones de vida y salarios en ese sentido era rebasada por las

posibilidades institucionales con que podía contar el gobierno para satisfacerlas adecuadamente. Para entonces partidos como el APRA, preocupados en no perder sus bases sociales de apoyo político en las ciudades y para no afectar las ganancias de los mayores beneficiarios del modelo exportador (oligarquía y empresas transnacionales) presionaban más al gobierno para satisfacer las demandas del total de la población, lo que tendió no solo en el APRA sino en otros partidos políticos a reproducir sistemas de clientelaje sustentados en la afiliación partidaria o los votos del electorado.

El problema que se tenía al frente para el gobierno de Bustamante en ese sentido era económico, político y social puesto que residía en la capacidad que el modelo exportador daba a la sociedad peruana para poder reproducirse. En el fondo las instituciones políticas y sociales del país aparecían endebles dado que las crisis internacionales a la que estaba sujeto la economía de exportación eran difícilmente controlados o siquiera amenguados en su impacto por el Estado. Éste no podía obtener mayores recursos fiscales a menos que recurriese al endeudamiento externo para redistribuirlo entre las clases sociales, lo que llevaba a otorgarlo de modo asistencialista en los sectores urbano-populares que iban creciendo y organizándose en sindicatos y organizaciones estudiantiles para presionar por sus derechos laborales y políticos, dejando a un lado esa redistribución todavía al gran sector de población rural que abandonado a su propia suerte debía forzosamente seguir migrando a las ciudades y sumarse al conjunto de exigencias urbanas. Pero no todo el origen de la crisis estaba en la sola escasez de recursos fiscales y en la crisis externa que la provocaban. Existía de por medio una desigual estructura de redistribución de esos recursos, porque dada la conformación oligárquica de poder, ella priorizaba antes que nada las exigencias de las ciudades por sobre el área rural. En las ciudades el mayor beneficiario de la redistribución de las ganancias eran obviamente las grandes empresas multinacionales y hacendados agro- exportadores, principalmente por el sector financiero y comercial, otro tanto pasaba a la industria local en forma de prestamos para comprar materias primas y tecnología del exterior, otro menos pasaba a los trabajadores y empleados del Estado en las ciudades y en el área rural como sueldos y salarios. En esta jerarquía de redistribución quedaba muy poco o nada para los habitantes del área rural, que lo podían percibir en magros salarios o a través de alguna obra estatal. La redistribución de ingresos favorecía así más a las regiones costeras (haciendas agro- exportadoras) y a ciudades administrativas del sistema exportador que como Lima iban concentrándose con el tiempo; dejando a regiones y ciudades de la sierra en completo abandono.

En 1947 esa situación sin embargo desembocó en una crisis económica y política. El APRA entonces quitó el apoyo a Bustamante en el parlamento y su gobierno que trataba de controlar la galopante inflación y el desequilibrio de la balanza de pagos con mayores restricciones a la población por un lado, y con mayores controles de cambio a la moneda extranjera como a la llegada de capitales extranjeros que desequilibraban más la economía. Estas últimas medidas levantaron la oposición de las clases exportadoras, quitándole al gobierno cualquier posibilidad de apoyo tanto entre reformistas y conservadores. Ante el entrampamiento político y dada la amenaza de entrar en una nueva espiral de violencia política, impulsada por las reivindicaciones populares como de la oligarquía por proteger sus privilegios, ésta última recurrió una vez más a la vieja fórmula de impulsar un golpe militar, la cuál llegaría recién hacia 1948 con el general Manuel A. Odría, imponiendo lo que llamó el régimen de “Restauración Nacional” y reafirmando otra vez la imposibilidad de la oligarquía de canalizar las soluciones de modo democrático e institucional.

Sobre esta década de 1940 podemos decir en suma que estuvo signada en su mayor parte por gobiernos democráticamente elegidos (aún no obstante las restricciones imperantes) y que de algún modo se vieron legitimados por el hecho de querer impulsar una incipiente industria

nacional establecida en las ciudades. Ella les dio la oportunidad tanto a Prado como a Bustamante, y al APRA a su sombra, a manejarse con ciertas libertades para legitimarse en el terreno político y electoral con la población, impulsando una generosidad que superó al populismo de Leguía, pero que al igual que éste terminó con una crisis que frenaron las tímidas reformas en el aparato productivo dejando a cambio un creciente volumen de demandas insatisfechas de una población urbana que crecía con mayor celeridad.

La población en la década del cuarenta en Lima y Callao representaban el 17% del total del Perú. Las migraciones masivas y la hipercentralización política de la capital limeña que se habían reforzado mutuamente recrudescieron con el régimen de Odría que impuso un programa decidida y típicamente neo-liberal - impulsado sobretodo desde el diario La Prensa y su director Pedro Beltrán- quién para recuperar la confianza del capital extranjero, aplicó fuertes medidas anti-inflacionarias y de ajuste fiscal. Una vez recuperada la coyuntura internacional, sobretodo por la guerra en Corea, las exportaciones volvieron a crecer y con ella los ingresos del gobierno que volvió a practicar una política asistencialista de redistribución de la riqueza de un modo no menos populista entre los sectores urbanos, concentrándose sobretodo en la construcción en obras de infraestructura pública. Al fin y al cabo esa fue la fórmula que logró mantenerlo en el poder entre 1948 y 1956 (re-legitimándose todavía en una elección amañada en 1950) Aún cuando a muchos analistas les sorprenda hoy en día esa combinación de política económica neoliberal con asistencialismo gubernamental en la legitimación del poder, esta ya se practicaba con intensidad en aquella época.

El escenario en la década del '50 era ideal para tales estilos. Ciudades que explotaban de migrantes, una sólida economía fiscal producto de ingresos de exportación, fuerte represión a los opositores políticos, principalmente al APRA y al PCP, una oligarquía complaciente e incondicional, clases medias débiles y clientelizadas, una esfera internacional indiferente por el peligro comunista y la guerra fría y, finalmente, una Fuerza Armada que aún no se articulaba institucionalmente en proyectos autónomos y globales de desarrollo dado el contexto conservador y anticomunista. Pero como todo gobierno formalmente democrático tiene un límite de renovación o conclusión, Odría tuvo que ceder ante el pedido legítimo de elecciones democráticas del sector empresarial que no veían bien la perpetuación de un dictador de modo indefinido y dada que las presiones políticas y sociales contra la represión ejercida. En 1956 se convocaron nuevamente a elecciones y Manuel Prado fue electo nuevamente.

Para aquella década el contexto social estaba prácticamente transformado con relación a las décadas anteriores. De ello tomaron cuenta las tradicionales y principales instituciones representativas del país. La iglesia Católica que no estaba al margen de todo ello, sufrió un cambio en su enfoque social (consagrado en Vaticano II) con las transformaciones ideológicas, políticas y sociales del contexto mundial, asumiendo por entonces la necesidad de atender aquellas demandas y poniéndolas en función de su prédica cristiana de justicia social. Aún dentro del clero y la jerarquía se suscitaban esas contradicciones dada la recomposición de sus miembros de las clases medias y bajas, lo que se reflejaría en los nuevos movimientos políticos cristianos. Algo parecido sucedía entre las Fuerzas Armadas y en el Ejército en especial, donde esta recomposición asumió en combinación con su tarea primordial de la defensa nacional, la idea de que en caso de guerra exterior y dada la situación de crisis estructural y de lucha de clases una vez más el país se encontraría como en 1879, dividido, y peor aún, enfrentado internamente. Esto era algo que ellos no podían volver a permitirlo, sobretodo cuando la amenaza del Ecuador y de Chile se veía latente. También para aquel contexto el refuerzo de las clases medias ligados al sector comercial, burocrático e intelectual de las ciudades y que luego de la caída de Leguía se vieron relegadas, recuperaron su sentido crítico y contestario al

status quo vigente que no contemplaba sus intereses ni de los trabajadores y mucho menos de un sector rural que manifestaba ya con reiteradas y más seguidas movilizaciones campesinas, la amenaza de una violencia a punto de explotar. En ese sentido veían que el camino de la modernización y la integridad económica y política del país no iba por las políticas neo-liberales impulsadas por la oligarquía. Incluso dentro del seno de la propia oligarquía familias como los Miro Quesada y el diario El Comercio contemplaban la posibilidad de llevar a cabo las reformas necesarias como una ineludible necesidad en un contexto de inestabilidad social. La formación de nuevos partidos como la Democracia Cristiana, Acción Popular y una amplia gama de partidos reformistas o de tendencias políticas y sociales centro izquierdistas hicieron patente también la necesidad de cambiar el rumbo del país con respecto a la crisis del momento. Así mientras el APRA dejaba sus posiciones radicales originales conservadurizando sus lineamientos para su reingreso a la política nacional, otros sectores de la sociedad tomaban su posición original.

En 1957 y con Manuel Prado como ganador tuvo que afrontar la herencia de Odría. La bonanza internacional que lo había favorecido había pasado y su política de gasto dejaron tan mal trecha una vez más a la economía que el nuevo presidente tuvo que confiar a Pedro Beltrán, inminente neo-liberal de la época, la cartera de hacienda. El paquete de medidas era obvio: ajuste fiscal, restricción monetaria, apertura a la inversión extranjera, reducción de controles cambiarios y fomento a las exportaciones. La inflación se redujo y la economía se recuperó a la vista de los inversionistas en 1959 perdurando hasta 1962; pero las demandas sociales también se incrementaron y el regimen de convivencia bajo el cuál partidos como el APRA, el PC, los partidos de centro izquierda reformistas y las facciones de la oligarquía habían establecido en el parlamento se deshizo. Esta “convivencia” que tenía por misión establecer una estabilidad a la democracia y no permitir un nuevo golpe de cualquier aventurero militar, se vio disuelta principalmente por el debate que se originó en torno a la situación de la International Petroleum Co.(IPC). El sector pradista, las facciones agro-exportadoras de la oligarquía y el APRA convencida de la necesaria transición democrática que garantizara su eventual acceso del poder en algún no muy lejano día, sumaron la defensa de la propiedad privada de la petrolera norteamericana. Los partidos reformistas y aún el propio ejercito con su idea de la “seguridad nacional” eran en cambio de la opinión de la necesidad de su nacionalización. La irreconciliable actitud de ambas posiciones polarizó una vez más a la sociedad hacia la década del '60, que por lo demás estuvo marcada por una movilización campesina masiva y un ambiente mundial agitado por revoluciones y guerrillas izquierdistas, las que llevaron principalmente al ejercito por un lado y a las facciones radicalizadas de la izquierda peruana a plantearse la idea de la imposibilidad de los cambios por vías democráticas.

En ese contexto y ante la posibilidad electoral de 1962 de que el APRA y el partido de Odría asumieran el gobierno por la “alianza” lograda en el congreso, la Fuerza Armada dio por primera un golpe institucional dejando atrás el caudillismo que había caracterizado a los anteriores golpes e impulsado por la Oligarquía. Su gobierno duró un año, tiempo suficiente para sentar las bases legales de lo que debían ser la Reforma Agraria, el Sistema Nacional de Planificación, el Banco de Vivienda y leyes de carácter laboral, además de asegurar una transición anti-oligarquica con la asunción de Fernando Belaunde en 1963 que contaba con el apoyo de la Democracia Cristiana, permitiendo respirar todavía al sistema democrático como sistema viable de reforma. No obstante aquella “alianza” en el parlamento de los partidos de Odría y del APRA resultó crucial para aceptar tales reformas. Mientras tanto las izquierdas radicalizadas ante su convencimiento de la inviabilidad de las reformas y siguiendo la inspiración cubana y guevarista, inició entre 1962 y 1965 la lucha armada. La incertidumbre de la viabilidad de las reformas por un sistema democrático trabadas por la oligarquía como las

izquierdas radicalizadas, convenció también al ejército de tal proceso, interviniendo institucionalmente por segunda vez en 1968 con el pretexto de que la IPC no sería expropiado por el gobierno, justificando a su parecer también aquella imagen de incapacidad del sector civil de la sociedad para solucionar adecuadamente el problema de las reformas estructurales del país. El general de división Juan Velasco Alvarado y un sector de la oficialidad encabezó así el autodenominado Gobierno Revolucionario de las FFAA dispuesto a cumplir las reformas estructurales que la sociedad requería. Allí se cerró la etapa oligárquica del ejercicio del poder en la sociedad peruana y consolidó un nuevo modelo de ejercicio del poder y de sus relaciones con la sociedad, ambas se influirían mutuamente en las siguientes tres décadas.

DE LA PROMESA REFORMISTA A LA SOCIEDAD EN CRISIS

La caída del poder oligárquico y el sofocamiento de las guerrillas de la izquierda radicalizada en la década del '60 marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia peruana. Ella partió de la histórica promesa aprista de la década del '30 de modernizar en lo económico y democratizar en lo político a la sociedad peruana superando para eso las trabas institucionales del sistema oligárquico (descritas en el tratado anterior), tarea que finalmente fue ejecutada por los militares tres décadas después. Los resultados no pudieron ser a pesar de ello satisfactorios.

El llamado Gobierno Revolucionario de las FFAA tenía un objetivo primordial. Él consistía en “romper la dependencia externa del país hacia el capital extranjero (imperialismo) y a la dominación interna de las clases oligárquicas” que según decían eran las principales causas de atraso, división y conflicto de clases en la nación. Si bien esta aparecía como una política nacionalista y modernizadora que sustentaba la necesidad de una intensiva industrialización del país que la liberara de las crisis internacionales y tendiese a la autarquía económica - valiéndose para ello de las estatizaciones y la inversión pública en nuevas empresas-; y por otro lado, imponer un ferreo control social para canalizar las demandas institucionalmente dentro del Estado y evitar cualquier intento de resistencia social, según prescribía la disciplina militar, recurriendo para eso a una fuerte propaganda nacionalista y/o de pura represión.

Ambas no fueron suficientes para consolidar la formación de un mercado interno como requisito fundamental de ese auto desarrollo que tanto se quería. Los problemas que se generaron a partir de la instauración de dicho modelo de desarrollo (Industrialización por Sustitución de Importaciones) y el modelo de inclusión político de la población civil sustentado en un modelo corporativo militar de organización (gremios coaccionados y sociedades o cooperativas de producción sometidas a la dirección del gobierno), llevó a que tras un aparente crecimiento de la economía (1% a nivel per capita) y pese a que nunca dejó de ser exportadora -aunque esta vez canalizaba las ganancias a la reinversión de un aparato productivo propio-, no podía mantenerse con solo esta capacidad, agudizada además por la excesiva confrontación con los Estados Unidos que retiró su confianza e inversiones de la economía peruana. Ya hacia 1975 se vivía una etapa de depresión política y social; el gobierno militar estaba agotado por la magnitud de una crisis interna dado el fracaso de las medidas económicas y políticas. Aquél año el pronunciamiento de un sector militar conservador, encabezado por el Premier de la República, general Francisco Morales Bermudez, asumió el gobierno iniciando una segunda etapa de reformas, lo que en el fondo era mas bien el desmantelamiento de la primera.

El gobierno de Morales Bermudez tuvo entonces que enfrentar una crisis económica que si bien devenía de problemas tan tradicionales de los modelos de exportación como son la crisis en la balanza de pagos (agravado con una descomunal deuda adquirida para la financiación del

programa “revolucionario” y el equipamiento militar) y el decrecimiento paulatino de las exportaciones (más de la anchoveta) dada la crisis petrolera de 1973, reflejaba en el fondo que quedaban también inalteradas las estructuras económicas que se pretendían cambiar. En las siguientes dos décadas esta condición se iría exacerbando más en la sociedad peruana. Mientras tanto la aplicación de un nuevo programa de ajuste fiscal y el favorecimiento de una nueva coyuntura para las exportaciones, permitieron recuperarse a la economía mas no las simpatías de la población hacia el gobierno. Organizada ésta en partidos políticos y sindicatos gremiales presionaron con movilizaciones y paros nacionales para una transición democrática, la cuál se produjo con el llamado a la elaboración de una nueva carta política en 1978. Los resultados de aquellos comicios reflejaban el contexto de una población que ya se había insertado en la vida política del país por medio de los partidos políticos del APRA, del centro y de izquierda, además de sus organizaciones laborales; en ese aspecto parecía que la inserción de la representación política ciudadana se había logrado ya que la carta elaborada tenía un espíritu social moderado. Hacia 1980 la elección de aquel presidente con los votos de una izquierda políticamente dividida y un APRA envuelta en una crisis interna desde la muerte de su fundador, que había sido depuesto doce años antes, volvía a un país que estaba profundamente transformado y con una crisis que descubrió problemas estructurales difíciles de resolver en un marco institucional aún poco definido.

SOCIEDAD EN CRISIS, VIOLENCIA POLÍTICA Y EL PROBLEMA DE LA DESINSTITUCIONALIZACION

La elección de Fernando Belaunde introdujo así un sistema institucional de representación política transformada pero que aún era poco reconocible entre las elites políticas y sociales dirigentes. En principio porque ya no había de por medio aquella oligarquía que sostuviera hábitos y prácticas excluyentes en el gobierno del Estado, dejando en pie mas bien a una clase empresarial que se había desarrollado por varias décadas a la sombra de las luchas políticas y la aplicación de programas económicos que tendieron a reforzar sus posiciones en las urbes y con el capital externo; en tanto que los partidos tradicionales (más en la izquierda) seguían pensando en la “táctica” al acceso del poder que en el papel real de su representación de las capas de la sociedad en el nuevo escenario nacional.

El gobierno de Belaunde entre 1980 y 1985 marca así un espacio de transición importante ya que empezaba bien por el auge de las exportaciones y la devolución de los medios de comunicación. Desafortunadamente para el país y este gobierno, una vez más la crisis financiera externa de 1982 y los desastres naturales del fenómeno del Niño en 1983, sumaron el detonante de una crisis estructural que estaba latente en la economía del país. Esta ambigüedad del gobierno para asumirla se notó principalmente en su capacidad para definir la política económica, pues ni tan liberal y a su vez poco estatista en las reformas, se dedicó a administrar la crisis en auge; sus primeras consecuencias fueron dejar de pagar la deuda desde 1984 y una primera histórica inflación acumulada que rebasaba el 100%.

A partir de allí el descrédito de un gobierno y su partido conservadurizado por el escenario político vigente (junto al PPC), en medio de un programa de ajuste fiscal y monetario “ortodoxo”; planteó la posibilidad de una alternativa política y carismáticamente bien representada de Alan García, un miembro nato del APRA que políticamente resolvió las contradicciones internas del partido y los unió en la competencia electoral frente a un conglomerado de partidos de izquierda que derrotados en 1980 los llevó a formar la Izquierda Unida con el éxito electoral de 1983 al municipio limeño. El APRA triunfó en 1985 de la mano de García y planteó un programa económico “heterodoxo” (a través de un impulso del gasto fiscal en salarios y sueldos, créditos masivos, empleo masivo, el control de precios para el

control inflacionario y el pago de la deuda con el 10% de las exportaciones) como alternativa de un país que ya vivía una violencia política recrudecida por la crisis económica heredada. El planteamiento radicalizado contra el capital extranjero y un frágil matrimonio con un sector de la clase empresarial dio al final al trasto con el programa económico pensado para un cortísimo plazo de reactivación productiva pero que se convirtió en instrumento político de un gobierno que buscaba el favor de las masas. La dilapidación de las reservas acumuladas con los ajustes de los dos gobiernos previos en los dos primeros años de gobierno, resolvió la desatinada medida de estatizar una banca que ya estaba sometida en un 50% desde Velasco. La crisis fiscal se reflejó en los ajustes diarios de precios y una inflación que desbordaba acumulando 2 mllns.% al final del regimen.

La crisis económica, la violencia subversiva en aumento y la estatización de la banca alejaron así al sector empresarial del gobierno convirtiendo al nuevo abanderado de las “libertades democráticas”, el novelista Mario Vargas Llosa, en el promotor de un programa ya conocido y recomendado siempre por las entidades financieras internacionales: ajuste fiscal y monetario radicales (shock) para recuperar la caja fiscal, el pago de la deuda externa y controlar la inflación. Por otro lado el desmantelamiento total del Estado en la economía para liberalizarla en la libre oferta y demanda, eran todas medidas indispensables para hacer del país “elegible” para prestamos en el contexto financiero internacional y hacerlo confiable a las inversiones del capital extranjero, luego de varios años de políticas adversas a su presencia.

La intensa campaña desarrollada por el FREDEMO (aglutinación de partidos conservadores como el AP, PPC, Libertad y otros) y el apoyo de los grandes empresarios de la banca, finanzas, comercio e industrias y la violencia política subversiva en auge, sumada a la herencia aprista del desastre económico; afectó de tal manera a una población empobrecida y temerosa por la inseguridad reinante en el país, que la propuesta conservadora del Fredemo y su ultra moderna y fastidiosa campaña mesiánica, contrastada con la apocalíptica del Apra, atizaron la creencia de que los extremos no convenían al país.

Por entonces la campaña silenciosa e informal de un candidato desconocido e independiente que aunque no decía nada concreto más que “Honradez, Tecnología y Trabajo” ecuanimizaba bien el ambiente electoral, privilegiaba precisamente aquellos espacios de una sociedad que ya había rebasado los marcos legales y formales del Estado y que los otros partidos descuidaron durante la década de los ochenta. La sintonía entonces entre la población y el candidato “independiente” se reflejó en los resultados de 1990 (ya en 1989, los independientes dieron el primer campanazo de alerta en las municipales). Vargas Llosa no obtuvo la mayoría requerida y fue derrotado en segunda vuelta por Alberto Fujimori, un catedrático con mucha experiencia política universitaria, con el apoyo de una sociedad informal, despolitizada y desintegrada de los marcos del Estado, además del apoyo de la izquierda y el APRA.

La asunción del nuevo presidente no era entonces bien digerida por amplios sectores del empresariado pero especialmente por los militares, que luego de su retirada en 1980 del poder y ante el surgimiento y avance de los grupos subversivos de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en 1984, desconfiaban no solo de la capacidad del presidente electo sino del propio sistema democrático institucional que se había mostrado irresoluto y miope en su evaluación tanto de este problema como de la crisis económica.

El Partido Comunista SL, era un movimiento hiperradicalizado de izquierda que creía todavía en la lucha de clases y el asalto revolucionario del poder en nombre del proletariado; una minoría que, como decía la izquierda formal, se anclaba en el pasado y contradecía la posibilidad de construir un poder sustentado en la democracia representativa. Lo real es que

mientras la izquierda formal decidió sumarse a la construcción de ese poder, ellos habían iniciado ya una campaña silenciosa de adoctrinamiento y reclutamiento desde los claustros de la universidad San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) a fines de los sesenta y en los setenta. Su modelo estratégico era la revolución china de Mao Tse Tung y consistía en dominar primero el área rural para lanzar sus huestes a las ciudades. El MRTA también estaba conformado por antiguos militantes izquierdistas y de facciones del APRA radicalizados; pero su mayor inspiración no estaba en la China de Mao sino en las guerrillas latinoamericanas de los sesenta; tenían la declarada intención de movilizar en zonas específicas bajo su orden político y militar a la población contra las fuerzas militares y de seguridad del Estado. La realidad es que para ambos movimientos la resistencia de la población para sumarse a sus proyectos subversivos era un factor con el cuál no contaron. El rechazo de la población a la violencia y al terror del cuál hacían gala ambos grupos para amedrentar y coaccionarla en su “colaboración” y la legitimidad que el Estado había ido adquiriendo con el transcurso de décadas de lucha anti-oligárquica –no obstante la violencia genocida e indiscriminada de las fuerzas de seguridad desatadas hasta la segunda mitad de esta década- hicieron aparecer tales proyectos como inviables e imposibles de respaldar. La población rural reaccionó entonces empujando a la subversión fuera del área organizándose en rondas campesinas con o sin ayuda del ejército. La subversión había perdido entonces su primera partida ya que concentrada y expuesta a las fuerzas de seguridad del estado, se vio obligada a incrementar sus acciones terrorista en las áreas urbanas entre 1987 y 1992.

La primavera democrática de 1980 a 1992 sin embargo fue para la propia FFAA un problema no solamente por su retiro de la política activa sino de su propia reinserción institucional en el nuevo esquema de representación estatal. El conflicto con Ecuador en 1981 les dio un primer impulso, pero las tensas relaciones establecidas a raíz de la subversión con el poder civil, sobretudo por la cuestión de los Derechos Humanos y el intento de García por controlarla políticamente sumado a su desastre que hacía peligrar al propio Estado, llevó a que un sector de la alta oficialidad elaborara un eventual programa de intervención al gobierno después de un posible golpe de Estado (1988). Este plan se sustentaba en la necesidad primordial de la Defensa Nacional, que amenazada esta vez desde adentro y que marcaría una tercera intervención política institucional de las FFAA. Las elecciones de 1990, dejaron sin embargo a la expectativa tal incertidumbre. El giro sorpresivo del electo presidente Fujimori a un programa económico y social de derecha (reflejado en el celebre Fujishock), abandonando a su base electoral original y la necesidad de encontrar un nuevo sustento político lo acercó más al respaldo de la FFAA, el cuál lo obtuvo desde un sector específico vía favores políticos para el acceso a los principales puestos de mando deshaciéndose del grupo institucionalista para consolidar tal apoyo.

El horizonte para abril de 1992 aparecía así como un pacto implícito entre el gobierno, los servicios de inteligencia que habían adquirido ascendencia sobre el presidente y un sector politizado de la FFAA para asumir el poder total del Estado. A partir de ese momento y con la legitimidad inicial de la necesidad de la defensa interna que tuvo su éxito en la política antsubversiva con la captura de los líderes terroristas y a la derrota de la inflación a un altísimo costo social; han marcado el proceso actual de un gobierno que ha venido aplicando un programa basado en el ajuste fiscal y la liberalización a las fuerzas del mercado de la sociedad, con la tendiente desaparición del Estado no solo en el mercado sino de sus mecanismos institucionales con que emergió luego de la experiencia militar y que estuvieron consagradas en la constitución de 1979, reemplazada por una dudosa elección de 1993 y que no garantiza en la actualidad la continuidad de un proceso de incorporación representativa de la población a una representación democrática del poder sino que más bien lo interrumpe y retrocede hasta formas que parecían haber sido superadas; la polarización del país a raíz de la

temprana proclama gubernamental a una segunda reelección presidencial con tradicionales métodos de asistencialismo populista (1996) es una muestra de ello.

ECONOMIA, SOCIEDAD Y CULTURA EN EL PERÚ CONTEMPORANEO

La configuración de la sociedad peruana desde 1930 hasta hoy ha estado signado por dos aspectos centrales: un crecimiento demográfico sin precedentes en los siglos anteriores y su reestructuración radical en términos sociales, culturales, ideológicos y mentales. Ambas situaciones se han reflejado de alguna manera en la parte política que hemos descrito antes. Entre 1876 y 1940 la población había crecido de 2704998 hbts. A 7023111 hbts. es decir a una tasa promedio de 1,3% anual. Los resultados de esos índices demográficos crecerían entre 1940 a 1981 a 2,2; 2,9 y 2,6% anual llegando en 1981 a 17005210 hbts. Hacia la 1993 el total de población giraba alrededor de 28 millones de habitantes a tasas similares del crecimiento previo. En mas de un siglo la población peruana se multiplicó más de diez veces a su tamaño original a esas tasas anuales mientras el PBI per capita solo crecía en la década del '70 a 1% anual, muy por debajo de lo requerido, sin contar las pésimas condiciones de redistribución que han empeorado en los últimos años a favor de las ciudades y de los sectores de ingresos más altos.

Las consecuencias fundamentales de tales cambios han sido la descampesinización y desruralización por la urbanización, marginalización e informalización de los nuevos habitantes llegados a las ciudades. La sierra por otro lado es la región que ha expulsado la mayor proporción de migrantes a la costa y en menor proporción a la selva. El proceso seguido en el Perú es por tanto un fenómeno que se repite en los países que no han podido salir de su estado de sub- desarrollo por la ausencia de exitosos procesos autosostenidos de industrialización y modernización económica de ahí que lo que se ofrece a la población que no ha podido ser integrada al sector urbano y moderno de la sociedad - que en el caso limeño tiene el patético récord de la tercera parte del total de habts. del país -, es la confirmación de que los procesos urbanos van paralelos a la reconstrucción del tejido social de un país que no es moderno pero tampoco tradicional. El problema que se presenta a los analistas sociales entonces tiene que ver con el tipo de sociedad en que vivimos.

Los rasgos primordiales que la actual sociedad peruana presenta es la hegemonía de las relaciones mercantiles. La producción de mercancías de consumo masivo como alimentos, vestidos y medicinas por ejemplo; los de uso productivo tales como herramientas y maquinarias de tecnologías propias o importadas; el predominio del sector de servicios en que se desenvuelven las actividades profesionales, de comercio y de intermediación entre los consumidores (sistemas de gobierno, sistemas de información) y el sistema financiero que lo sostiene (bancos, entidades de finanzas nacionales e internacionales), están regidos todos bajo las normas de valorización de un mercado que se hace más complejo y se extiende a otras esferas de producción no mercantil sí es que resultan rentables o retrayéndose de los sectores que no resultan así pero siempre cruzándolo y supeditándolo a su propia lógica; es lo que en suma se ha dado a llamar “nueva heterogeneidad estructural”.

No obstante el predominio de las redes mercantiles no es absoluto con relación a las estrategias de la producción y reproducción de la mayoría de la población peruana. En principio porque la situación de empleo (permanente o no) ha estado en función de los ciclos de expansión y contracción de una economía nacional que como hemos visto ha estado en continua relación con el contexto internacional. Incluso las condiciones en que ha configurado un mercado de trabajo en el Perú ha estado acorde siempre con las limitaciones que han impuesto esas crisis, repercutiendo en las posibilidades de vida de una población en

expansión acelerada. En el área rural por ejemplo la situación del empleo campesino por temporadas en las haciendas plantaciones y empresas mineras fue un rasgo que se mantuvo hasta la entrada de los grandes capitales transnacionales desde un poco antes de la década del '20; de allí para adelante y con el crecimiento poblacional el empleo temporal se deterioró hasta la década del '50 lo que sumado al crecimiento de las carreteras y los transportes ha podido superar en buena parte esa etapa de estacionalidad. Desde la década del '70 hasta hoy el recrudecimiento de la crisis ha acelerado los procesos de descomposición de los empleos en el área rural. Estas transformaciones, derivada de la falta de tierra y oportunidades para el propio campesino, obligó en principio a la mayoría a trasladarse a las ciudades de modo permanente; después de la violencia política muchos refugiados están revirtiendo el proceso al regresar a sus tierras de origen. El hecho que por otro lado describimos en torno a la limitada política de industrialización de las ciudades, principales receptoras de la población migrante, encaró las alternativas con que contaban estos nuevos ciudadanos. A partir de allí podemos entender cuáles fueron las estrategias de adaptación para poder quedarse y sobrevivir en un medio que les era adverso a su inclusión en el sector moderno.

Para la mayoría que se trasladó a las ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo y en las principales ciudades de los departamentos que actuaban como polos de atracción (capitales), existía la posibilidad de asentarse primero en los espacios disponibles de las grandes ciudades que podían estar planificados para una eventual ocupación. En Lima los distritos que nacieron en calidad de urbanizaciones populares en diversos momentos se ajustaban en principio como espacios planificados de crecimiento para trabajadores y empleados que en su mayoría provenían de las provincias. Sin embargo cuando las posibilidades del Estado para otorgar espacios ordenados y saneados legalmente con sus servicios de agua, luz, desagüe, transporte, seguridad y educación ha sido sobrepasado por las crisis políticas y económicas –cosa muy recurrente para las últimas décadas -, entonces han producido fenómenos como las invasiones de terrenos, primero del Estado y luego de particulares, oponiendo fuertes resistencias y formas de organización que se adecuaban a la defensa de lo conseguido. Esto los diferenciaría de los distritos de clases alta y media, que valiéndose de sus propios medios han adquirido y delimitado sus zonas de ocupación bajo una lógica enteramente capitalista y moderna. La propia conformación de las urbanizaciones en sus primeras etapas de ocupación con cierto diseño y que lo asimilaría a los barrios residenciales de clases acomodadas, fue seguida en las zonas periferia de modo menos riguroso en el ordenamiento por aquellos que no eran favorecidos en el primer proceso y que se derivaba de su exclusión del sistema productivo formal de las industrias y los servicios modernos, constituyéndose en una muestra de aquel proceso de desbordamiento mencionado por otros investigadores. En ese sentido se puede hablar incluso de un hinterland de sub-urbanizaciones y un eje o “centro urbano” dentro de un distrito grande o conos separados todos entre sí dentro de la gran Lima.

Otra gran transformación son los sistemas de producción y servicios. Antes de las grandes migraciones las pequeñas unidades de producción (talleres) y de comercio (tiendas ambulantes y comercio ilegal) existieron siempre en las ciudades con todos los problemas adicionales de desorden callejero e incremento de la deshigienización que le significaban ya que tampoco ellos estaban articulados plenamente a la economía moderna del país y sus urbes. A partir de los '50 y '60 la causa del problema derivó de las proporciones numéricas a las de alta intensidad. En la década de los ochenta en Lima se constituye “Polvos Azules” detrás del palacio de Gobierno como un intento desesperado por encontrar un orden en la ciudad. Con el recrudecimiento del desempleo estructural en las dos últimas décadas en Lima se lucha ahora por mantener su Centro Histórico como zona libre de comercio ambulatorio e informalidad puesto que es el país en su conjunto el que ha caído en esas definiciones.

En el área rural las condiciones de vida ligado al problema del empleo en cambio han mantenido algunas situaciones previas a la década del treinta y otras han cambiado. El principal rasgo que se ha mantenido es el estado de pobreza crítica en que se encuentra cada vez más el campesinado y que se agrava por varios motivos. Principalmente las condiciones de su ingreso pleno a los mercados rurales no le ha dado la oportunidad de adaptarse y vivir solo del intercambio mercantil ya que al estar en el último escalón de sus beneficiarios las crisis a la que esta sometida la economía peruana y mundial lo obligan a regresar a su economía de autosubsistencia reduciendo sus posibilidades de consumo y manteniendo en zozobra su calidad de vida. Esto es peor aún cuando muchos de los mecanismos de su equilibrio productivo y reproductivo que subsistieron en el área rural hasta la década del '30 y '50 fueron suprimidos por el mercado, el Estado, la propia sociedad urbana y su natural evolución histórica; por ejemplo, sus periodos de vida hasta la década del cuarenta eran entre 30 y 40 años ascendiendo a 50 y 60 años en los '90; las carreteras también han contribuido a ello como las medicinas y vacunas, la violencia política guerrillera y subversiva que en las últimas décadas desató éxodos masivos del campo a la ciudad y ahora en su sentido inverso, fundando y refundando pueblos virtualmente desaparecidos.

La búsqueda de oportunidades de la población rural serrana como la gran mayoría de la población también se ha dirigido a alternativas ajenas a las que puede dar la sociedad y economía formales. Las migraciones a la selva alta o montaña han sido una constante desde principios de siglo cuando actuaron como propietarios, capataces y peones en la explotación cauchera, los lavaderos de oro y en las últimas décadas en las plantaciones de coca y sus actividades conexas al narcotráfico. En este sentido los principales afectados han sido las poblaciones selvícolas que en distintos periodos de la historia se han visto sometidas a la explotación indiscriminada sea como esclavos o siervos, el genocidio y el sometimiento cultural a las influencias del mercado, de la violencia política y de las mafias que de acuerdo a las circunstancias políticas o de lucro local han establecido alianzas y guerras privadas entre sí o contra el Estado limitando su influencia y dominio real. En esos aspectos la propia ecología de las regiones se ha visto afectadas por los procesos sociales de las últimas décadas principalmente porque en la montaña y selva baja la destrucción masiva de los habitats de la flora, la fauna, los suelos y la población existente desde tiempos inmemoriales. En la sierra porque las actividades mineras contaminadoras y el continuo desgaste de las tierras de cultivo o porque el desplazamiento ha obligado al abandono de espacios ocupados desde tiempos antiquísimos. En la costa porque los nichos urbanos que explotan sin orden ni mínimas condiciones de seguridad y vida han llevado la tugurización al extremo de causar explosivas presiones psico- sociales.

Si las situaciones en que se ha desenvuelto la gran mayoría de la población han configurado una sociedad como la peruana en los últimos setenta años, es en las instituciones que han creado es donde se refleja aquella capacidad de construir alternativas que cruzan al mercado o reproducen espacios aislados de ella para seguir sobreviviendo ya no en su lógica que impulsa la ganancia y el lucro individual sino de la cooperación y la reciprocidad producto de la reducción para las grandes mayorías de una forma de vida moderna. Los mecanismos que se han observado al respecto tales como las cooperativas y mutuales de ahorro y crédito para vivienda y trabajo, las empresas autogestionarias típicas en las décadas de los setenta y ochenta; las organizaciones para la adquisición de servicios básicos de las urbes en sus etapas de formación y crecimiento, con el apoyo directo o indirecto del Estado o sin él; las organizaciones formadas al amparo de las comunidades religiosas y de los sindicatos de diversas actividades de carácter no empresarial (transporte, comercio ambulatorio, etc), auspiciadas por ONGs en el área de salud y educación, las organizaciones de madres y de mujeres que en la última década han sostenido los comedores populares y comités de vasos de

leche casi siempre por sus propios medios (y algún apoyo institucional o externo), han hecho que la crisis abierta desde hace casi dos décadas y que han afectado los espacios que el Estado no podía llenar plenamente o siquiera provocar una intervención mínima, sean llenados por estos movimientos sociales e instituciones. Un área representativa en este sentido es la de justicia puesto que ya no se habla solamente de un servicio más del Estado sino de un poder mismo; criticado durante décadas por su ineficiencia, ha adquirido, bajo la crisis de los últimos años, un carácter relevante por cuánto los mecanismos locales de la administración de justicia ejercidos por los jueces de paz han ampliando el sentido ciudadano de representación civil como mecanismo real de poder a través de su elección popular desde 1998, para arbitrar los conflictos locales de la comunidad con un derecho sustentado con valores ajenos al del propio sistema formal judicial, indicando que más que un derecho alternativo y popular (o contra poder) es un subsidiario para afrontar una realidad que el propio poder formal ha reconocido imposible de absorber y resolver satisfactoriamente bajo sus condiciones.

En el propio área rural - donde el problema judicial se reconoció con más énfasis- la necesidad de la población por institucionalizar alternativas colectivas frente a la crisis de las últimas décadas agravadas por la violencia subversiva y el abandono total del Estado implicó que a la lucha frontal de la población reorganizase en su retaguardia espacios de reproducción social para sobrevivir. Así en el marco de las rondas campesinas, reconocidas desde la década anterior y como parte del sistema de defensa nacional en esta década, parte ya no del supuesto de la estrategia de la población rural- campesina para integrarse al Estado sino más bien de una estrategia de éste último para reintegrar a este movimiento social a su control y como medio de control de una población que más allá de sus reales limitaciones siente su autoridad para sujetar una eventual inestabilidad de una población - dada su ausencia todavía de los futuros beneficios de un bienestar que aún permanece lejano para la gran mayoría de la sociedad- que por ahora y por necesidad estratégica está armada.

El impacto que finalmente ha generado la actual configuración social en las conciencias y mentalidades de las diferentes capas y sectores de la población, ha dado la posibilidad de que crearse mundos propios sea la consecuencia final y el principio por donde van las transformaciones de la sociedad peruana en el futuro inmediato. El proceso aquí adquiere un ribete similar al producido a fines de la década del veinte y principios del treinta, cuando las mentalidades estaban maduras para un cambio ideológico de las mentalidades tradicionales y estamentales a consecuencia de la desestructuración de la sociedad oligárquica y aristocrática; sin embargo a fines de los setenta y al entrar los ochenta los argumentos ideológicos de los movimientos de masas cedieron para plantearse ante nuevas necesidades, de modo mucho más específico y dentro de un nuevo escenario que fue interrumpido en su maduración por la violencia política y social además de la crisis de proyectos utópicos de largo plazo. Hacia la década de los noventa todavía subsiste el impacto de las transformaciones de las dos décadas previas, marcadas sobretudo en la facilidad que al menos para la población urbana ofrece el sistema de comunicaciones y la alta tecnología aplicada, los que han afectado nuestra cotidianeidad suplantándose la razón ideológica y utópica por un lado, predominante hasta los setenta, por una razón pragmática e instrumental, y girando por otro lado las emociones, gustos y sensaciones de aspectos menos convencionales a situaciones que reflejan más las realidades propias y muy peculiares de nuestro medio. La capacidad de creación cultural y su impacto sobre la sociedad han corrido con una velocidad que resulta inaprehensible hoy para los críticos mismos.

El sentido post- moderno de nuestra actual existencia no es en ese sentido una novedad para nuestra diversidad y heterogeneidad; la propia fragmentación espacial del país y de ciudades como Lima propician la creación de expresiones sociales propias en la música, los hábitos de

consumo, la expresión artística y literaria que ha impulsado un interés primordial por nuestro propio autoconocimiento. La difusión masiva de los medios de comunicación y especialmente la televisión en el ámbito de la cultura popular, sobre todo entre los sectores de población juvenil, parece ser la única capaz de poder moldear y transmitir las actitudes que la propia sociedad, recreándose a sí misma con las influencias propias de las empresas de la pantalla chica, produce y homogeniza en una suerte de pasteurización o purificación de nuestra crisis de valores mostrando lo que a ella le puede convenir desde programas religiosos y culturales de poco "rating" hasta las más grotescas muestras de lo que podemos ser sin mucho esfuerzo. Esto no obvia que existan también los espacios de exclusividad e intimidad que refuercen los lazos de solidaridad de grupos que puedan propiciar otros tipos de valores y moralidades pero sin mayor efecto sobre la gran parte de la población; las llamadas minoría étnicas, religiosas, culturales y de cualquier otra índole buscan establecer en ese sentido también su presencia en un *collage* cultural rasgos que la "actual sociedad del espectáculo" puede ofrecer. La identidad del ser alguien en este país, región o comunidad en ese sentido avanza hacia la diversificación y heterogenización que se esta dando en el resto del mundo, producto total de la globalización y universalización de la cultura aunque sin haber resuelto todavía el problema primordial del sentido de la modernidad en la sociedad peruana.

BIBLIOGRAFIA.-

LA REPUBLICA PERUANA EN EL SIGLO XX

COTLER, Julio: Clases, Estado y Nación en el Perú. Lima. IEP. 1978.

Democracia e Integración Nacional. Lima. IEP. Col. Mínima. 1980.

GONZALES DE OLARTE, Efrain: La Economía Regional de Lima. Crecimiento, Urbanización y Clases Populares. Lima. Centro de Investigaciones Económicas. 1992.

LOPEZ JIMENEZ, Sinesio: El Estado y la Ciudadanía en el Perú del Siglo XX. Tesis presentada para obtener el grado en Sociología. Fac. CCSS. UNMSM. Marzo. 1996 (Ya está publicada en versión editorial).

MATOS MAR, José: Desborde Popular y Crisis del Estado. Lima. IEP. 1986.

ROJAS, Jorge: Políticas Comerciales y Cambiarias en el Perú 1960- 1995. PUC Fondo Edtr. 1996.

ROSPIGLIOSI, Fernando: Las FFAA y el 5 de Abril. La percepción de la Amenaza Subversiva como una Motivación Golpista. Lima. Documento de Trabajo 73. IEP. 1996.

STERN, Steve: Los Senderos Insólitos del Perú. Lima. IEP - UNSCH. 1999.

THORP, Rossemary y BERTRAM, Geoffrey: Perú. 1890- 1977. Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta. Lima. Mosca Azul - Universidad del Pacífico. 1988.

LA REPUBLICA PERUANA EN EL SIGLO XX

CUESTIONARIO - GUIA

1°- ¿En su opinión la actitud de quién observa y analiza los hechos recientes puede ser objetiva? ¿Por qué?

2°- ¿Cuál fue el precedente del regimen de Augusto B. Leguía entre 1919 y 1930 en la esfera política y social peruana?

3°- ¿Cuál fue el significado de la crisis mundial de 1929 y su repercusión en el Perú de 1930 a 1933?

4°- ¿Por qué cambió el papel que le tocó jugar a la FFAA en la sociedad peruana entre 1930 y 1968?

5°- ¿Cuál fue el proceso de gobierno entre 1968 y 1980 del llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA)?

6°- ¿Cuál fue la experiencia democrática entre 1980 y 1992 y sus consecuencias en la crisis de los partidos políticos "tradicionales" y del propio sistema democrático?

7°- ¿Cuáles fueron los efectos del crecimiento poblacional sobre una economía en su PBI per capita que no crecía al ritmo del primero?

8°- ¿A qué responden las estrategias de la población para producir y reproducirse fuera de la economía formal (sector moderno) y del propio Estado como un dador de servicios?

9°- ¿Cuál ha sido la situación de la población rural y campesina en las últimas décadas?

10°- ¿Cuáles son las condiciones en la que la actual cultura y mentalidad del peruano promedio se desenvuelve?